

LOM
PALABRA DE LA LENGUA
YÁMANA QUE SIGNIFICA
Sol

Winn, Peter

La revolución chilena [texto impreso] / Peter Winn.

— 1ª ed. — Santiago: LOM ediciones; 2013.

160 p.: 21x16 cm. (Colección Historia).

ISBN : 978-956-00-0465-9

1. Chile - Historia - Gobierno 1970-1973 2. Allende
Gossens, Salvador 1908-1973 I. Título. II. Serie.

DEWEY : 983.0646 .-- cdd 21

CUTTER : W776r

FUENTE: Agencia Catalográfica Chilena

© LOM Ediciones

Primera edición, 2013

ISBN: 978-956-00-0465-9

A cargo de esta Colección: Julio Pinto

Fotografía de portada: John Hall

EDICIÓN Y MAQUETACIÓN

LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

TELÉFONO: (56-2) 688 52 73 | FAX: (56-2) 696 63 88

lom@lom.cl | www.lom.cl

Tipografía: Karmina

IMPRESO EN LOS TALLERES DE LOM

Miguel de Atero 2888, Quinta Normal

Impreso en Santiago de Chile

PETER WINN

La revolución chilena

Traducción de
Gloria Casanueva y Hernán Soto



CAPÍTULO 4 LA REVOLUCIÓN CHILENA

Salvador Allende era entonces presidente de Chile, elegido con un programa para conducir a su país por la *vía chilena*: un camino democrático hacia un socialismo democrático. Era el momento que había estado preparando durante una carrera política de casi cuatro décadas como diputado, ministro, senador y presidente de partido. Afortunadamente, resultó ser una estrategia que le dio importantes fortalezas, tales como un conocimiento de las instituciones políticas de Chile y de los políticos, así como cierta habilidad para manipularlos para sus propios fines. Incluso líderes de oposición lo admitían: «Allende tiene la mejor muñeca». Eran habilidades de un reformista formado en los corredores del poder: no las de un revolucionario que busca de derribar el viejo orden, sino habilidades adecuadas a una revolución entendida como «un proceso» y a la cual los maoístas llamaban irónicamente la «larga marcha por las instituciones burguesas».

Allende necesitaría de todas sus alabadas destrezas políticas y más para conducir a Chile hacia un socialismo democrático por un camino democrático; en primer lugar porque su propia elección era una victoria marginal y no un triunfo decisivo: el 36 % de los votos había sido suficiente para que Allende fuera elegido, pero era un débil mandato para cambios tan grandes como una transición al socialismo. La Unidad Popular era también minoría en el Congreso y no podía legislar sin el apoyo de sus opositores de centro-derecha —la posibilidad de legislar para abrir un camino democrático al socialismo no era ni remotamente probable—. El poder judicial era el arma más conservadora del Estado, apoyaba el statu quo y estaba compuesto por jueces de la élite que estimaban más la propiedad que a las personas. La burocracia, por su parte, estaba llena de opositores, en este caso demócratacristianos, que no podían ser reemplazadas debido a la enmienda constitucional aceptada por Allende a cambio de sus votos en el Congreso para ratificar su elección. El contralor, que velaba por la constitucionalidad de los decretos y leyes así como sobre asuntos fiscales, provenía de la oposición de centro-derecha. Las Fuerzas Armadas habían permanecido leales luego del asesinato de Schneider, y el general Prats era un constitucionalista que apoyaba su doctrina de no intervención política, pero su muerte había detonado divisiones

y deslealtades entre los militares y Allende sabía que, a medida que avanzara por la vía chilena, debería afrontar desafíos militares. La jerarquía de la Iglesia católica, que incluía a conservadores y progresistas, estaba controlada por moderados que apoyaban las reformas de la Democracia Cristiana, pero no una revolución marxista. Por último, la élite chilena no entregaría sin resistencia sus propiedades y su poder. Controlaba casi todos los medios de comunicación, los bancos y las empresas de producción y distribución más importantes; y además de la influencia que poseía en el Congreso, en los tribunales y en la burocracia, ya había mostrado en el pasado que podía usar sus recursos con dureza para proteger sus intereses.

Aún más, aunque Allende no conocía la decisión secreta de Estados Unidos de desatar una guerra encubierta contra su Gobierno para bloquear un recorrido exitoso del camino democrático al socialismo, pudo haber predicho esas acciones, ya que eran propias del «imperialismo yanqui». Allende y sus consejeros estaban preocupados por la política de Washington hacia Chile, un país tan dependiente del capital de Estados Unidos como de su tecnología, su maquinaria y repuestos, y su ayuda en alimentos. Todo ello los hacía vulnerables a la presión económica del país del norte, como había demostrado la crisis económica que el Gobierno de Nixon había desatado para crear las condiciones adecuadas para un golpe de Estado.

Allende había heredado una crisis económica y un sistema político profundamente conmocionado, primero por su elección y luego por el asesinato del comandante en jefe del Ejército. Comprendió que su primera tarea era restaurar la estabilidad política y económica para evitar que se crearan las condiciones para un golpe militar. Durante las primeras semanas, por lo tanto, Allende fue un modelo de moderación, una presencia que daba seguridad y advertía que había que moverse lentamente y actuar con precaución. Sus actos más radicales fueron simbólicos, como el reconocimiento diplomático a Cuba, que preocupó más a Washington que a los chilenos, mientras intentaba tranquilizar a sus partidarios izquierdistas, molestos de que no hubiera aprovechado la confusión de la derecha para iniciar su gobierno con cien días revolucionarios.

La moderación de Allende era una estrategia calculada para dar seguridad a las élites económicas y políticas y hacerles creer que, después de todo, un Allende en la presidencia podía no ser tan terrible, pues él era un chileno de izquierda con el cual se podía negociar. Gradualmente, el sistema político se corrigió solo y el espectro de la inestabilidad retrocedió.

Para Navidad, la amenaza de la crisis económica también había sido alejada. Allende no era economista, así que había entregado la responsabilidad de diseñar e implementar su política económica a un grupo de profesionales de izquierda, encabezado por Pedro Vuskovic, que tenía una larga experiencia como analista de la Comisión Económica

para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, pero muy poca experiencia práctica en manejar la economía de un país. Usando una estrategia nekeynesiana de gasto público para recalentar la economía en recesión y de control de precios —y no salarios— para mantener la inflación dentro de sus límites, Vuskovic había hecho grandes progresos y, a fines de diciembre, permitió que Allende pasara del proceso de estabilización de Chile al comienzo de su revolución desde arriba. Después de semanas de cautela, se movió con una rapidez y una decisión que tomó al país por sorpresa y a sus objetivos por asalto.

Revolución desde arriba

El programa de la Unidad Popular era claro en sus objetivos, pero vago en los medios para lograrlo. Dado que el triunfo de Allende no era esperado por los líderes de la coalición, se había pensado poco en cómo implementar su programa. Además, no había modelos históricos de una transición pacífica y democrática al socialismo y la mayoría de los teóricos marxistas eran escépticos de que pudiera realizarse.

Como consecuencia, el Gobierno de Allende tuvo que improvisar mecanismos para transferir el control de las «alturas dominantes» de la economía desde los capitalistas y chilenos, que hasta entonces habían sido sus dueños, al Estado. Típicamente, se diseñó una estrategia pragmática y heterogénea a tono con la realidad nacional, respetando las restricciones a su propio poder que estaban radicadas en el Ejecutivo. Sin embargo, el poder de la presidencia de Chile era tal que se decía que «era una monarquía elegida cada seis años», y Allende estaba preparado para usarlo, llegando al borde de los límites legales.

Ejecutivo y legalidad

En este sentido, la Unidad Popular contaba tanto con ese poder como con la destreza de su líder para generar una estrategia que condujera a Chile al socialismo.

El programa de la Unidad Popular contemplaba cuatro grandes cambios estructurales que en conjunto le darían el control sobre las posiciones claves de la economía: la recuperación de las «riquezas básicas», especialmente las minas de cobre; la nacionalización de los bancos; una profunda reforma agraria, y la socialización de las mayores empresas productoras y de distribución. Allende comenzó con la nacionalización de las gigantescas minas de cobre de propiedad norteamericana, lo que representaría el mayor cambio y el mayor desafío de su programa económico. A su vez, este era el más popular de los cambios en Chile y uno de los que provocaría menor resistencia entre los chilenos. Poco antes de Navidad, Allende anunció que enviaría una reforma constitucional al Congreso, nacionalizando las minas de propiedad extranjera. Detrás de este atrevido golpe había un cálculo político: Allende sabía que la Unidad Popular sola no tenía los votos en el Congreso para aprobar una reforma constitucional,

handwritten
Cobra

pero también Tomic había prometido la nacionalización, lo que probablemente movería a la mayoría de los demócratacristianos a votarla favorablemente. Aún más, en 1970, la nacionalización del cobre era tan popular en Chile que Allende estaba convencido de que ni siquiera la derecha se atrevería a votar en contra y, si lo hacían, tendrían que pagar un alto precio político. El análisis de Allende demostró ser correcto. El 11 de julio de 1971, la reforma constitucional fue aprobada por unanimidad en el Congreso y se convirtió en la Ley 17.450. Ni siquiera los derechistas más acérrimos se atrevieron a votar en contra. Allende celebró la votación como el «día de la dignidad nacional» y habló de la «segunda independencia de Chile». Lo que Allende llamaba «el sueldo de Chile» estaba, por fin, bajo el control de los chilenos. Sería uno de los pocos cambios estructurales de la era de Allende que la dictadura de Pinochet no revertiría. Y también, por cierto, un paso de gigante en el camino al socialismo.

Por entonces el Gobierno de Allende había dado, además, algunos pasos más pequeños para nacionalizar otros recursos minerales. El día de Año Nuevo, Allende anunció a los jubilados mineros del bastión izquierdista de Lota-Coronel que el Gobierno había comprado las minas de carbón a sus propietarios privados. En las semanas y meses que siguieron, se produjo la compra de la mina de hierro de Bethlehem Steel y de la única planta siderúrgica, y también la nacionalización de las oficinas salitreras de propiedad norteamericana.

Un año después de haber asumido la presidencia, Allende podía legítimamente sostener que había cumplido plenamente con su promesa de campaña de recuperar para Chile el control de sus «riquezas básicas», lo que sería uno de los éxitos principales de su gobierno.

handwritten
bancos

En vísperas del fin de año, Allende apuntó al segundo cambio estructural prometido por la Unidad Popular: la nacionalización de la banca privada. En su mensaje de Año Nuevo prometió al pueblo chileno un «aguinaldo» especial: la nacionalización del sistema bancario, que en vez de ser usado por la élite para sus intereses particulares usaría sus recursos a favor del pueblo chileno. Si las compañías del cobre eran la mayor y más estratégica inversión extranjera en Chile, los bancos eran la piedra angular de la docena de «clanes» que dominaban el sector privado de la economía, cada uno de los cuales utilizaba sus bancos como vaca lechera para atraer los ahorros de los chilenos y transferirlos después a las empresas del grupo. La nacionalización de los bancos privados sería un puñetazo —«a lo compadre»— contra el capitalismo y le daría al Gobierno de Allende los recursos para financiar otros cambios estructurales y programas sociales.

Como no había posibilidad de conseguir la mayoría del Congreso para legislar a favor de la nacionalización de los bancos, el Gobierno de Allende diseñó una ingeniosa estrategia: usar el mecanismo de financiamiento del capitalismo en su contra. En lo

fundamental, su plan consistía en tomar el control de los bancos privados haciendo una oferta de compra de acciones desde la CORFO, como si fuera una operación habitual en el mercado accionario. Este es un ejemplo del uso que hacía Allende de instrumentos antiguos para nuevos propósitos. Durante el gobierno del Frente Popular entre 1939 y 1941, se había creado una corporación estatal, la Corporación de Fomento (CORFO), cuyo objetivo era promover la industrialización, para lo cual podría crear empresas y comprar y vender partes de empresas. Antes de 1970, la CORFO había funcionado como empleada doméstica del capitalismo chileno, haciendo arriesgadas inversiones para echar a andar compañías que, una vez que habían demostrado su valor, eran vendidas a influyentes capitalistas a un precio inferior al del mercado. Ahora, la Unidad Popular usaría el poder de la CORFO para comprar acciones contra el capitalismo chileno.

En enero, la CORFO hizo una oferta pública para comprar acciones de los bancos privados a un precio superior al de mercado, como lo haría cualquier empresa interesada en tomar el control de otra. Solo que, en este caso, era el Gobierno de Chile el que hacía la oferta de comprar sus títulos a los accionistas de los bancos. Aunque los bancos privados, encabezados por el Banco de Chile —propiedad de la élite— resistieron la oferta y urgieron a sus accionistas para que no vendieran, muchos sí lo hicieron, tratando de salvar algo de sus inversiones. Gradualmente, el Gobierno fue tomando el control de las empresas bancarias, incluyendo las extranjeras, con las que negoció la compra de sus filiales en Chile. Un año después del comienzo de su administración, Allende pudo anunciar que su Gobierno controlaba el 90 % del sector bancario de Chile, aunque, solo a mediados de 1972, la CORFO pudo adquirir la mayoría de las acciones del Banco de Chile. Así, aun cuando el control no era tan completo como en las mineras, casi la totalidad del sector bancario estaba en manos del Gobierno a mediados de 1972.

Por entonces, el tercer gran cambio estructural de la economía chilena, la reforma agraria, estaba también casi totalmente implementada. La Unidad Popular deseaba llevar a cabo una transformación que pusiera fin al sistema patrimonial del latifundio que había imperado en el campo desde los tiempos de la colonia, con el fin de crear las bases para un socialismo rural que incrementara la producción agraria y los niveles de vida de los campesinos. Los demócratacristianos habían empezado el proceso de expropiación con su ley de reforma agraria de 1967, pero la habían aplicado de manera tan defectuosa que muchos de los involucrados en el proceso habían dejado el partido frustrados y se habían unido a la Unidad Popular con el MAPU, cuyo acrónimo significa tierra en el idioma mapuche. Había pocas posibilidades de que el Gobierno de Allende pudiera hacer aprobar una nueva ley de reforma agraria, pero podía tomar la ley de 1967, aplicarla con firmeza y darle una orientación socialista. Significativamente, uno de los redactores de esa ley, Jacques Chonchol, se convirtió en el ministro de Agricultura encargado de materializarla.

Reforma
Agraria

Aplicar
ley
DCI
no
muera
ley

Chonchol esperaba haber aprendido de los errores del gobierno de Frei. En primer lugar, consideraba que todos los latifundios de una provincia o comuna debían expropiarse al mismo tiempo, sin excepciones derivadas de contactos políticos, a fin de incrementar la eficiencia del proceso y la globalidad de la reforma. Quedarían en manos del Gobierno los complejos agroindustriales modernos y altamente tecnificados, pero la abrumadora mayoría de las tierras expropiadas serían entregadas a los campesinos que las trabajaban, para que las explotaran en forma de cooperativas, y no como propiedad privada como habían pretendido muchos demócratacristianos. Además, para aumentar la equidad de la reforma y resolver un problema social, las mujeres de los campesinos beneficiados serían miembros con derecho a voto en la cooperativa, a la que también se incorporarían minifundistas y trabajadores migrantes. Solamente cuando esas condiciones estuvieran cumplidas, el Gobierno les daría títulos de dominio sobre la tierra y permitiría que sus cooperativas se convirtieran en centros de reforma agraria (CERAS).

La culminación y profundización de la reforma de la Democracia Cristiana por parte de la Unidad Popular fue planeada como un proceso que no interrumpiría la producción agrícola de un país que, según Naciones Unidas, podría ser un gran exportador de alimentos, la California de Sudamérica, pero que seguía importándolos desde 1939. Esta reforma gradual, según el plan de desarrollo, estaría completa al final de los seis años del gobierno de Allende. Sin embargo, la inquietud rural y la presión desde abajo llevaron a la Unidad Popular a acelerar el proceso, que sería realizado finalmente dentro de dieciocho meses, la más rápida reforma de la propiedad de la tierra de esa envergadura hecha en la historia sin una revolución violenta. Ya a mediados de 1972, la reforma agraria estuvo casi completa, cambiando el Chile rural para siempre.

Por entonces, se habían hecho grandes avances hacia el cuarto objetivo de socializar las mayores empresas de producción y distribución o «monopolios» en Chile. En este protegido capitalismo chileno, en el cual «el Gobierno fija precios, cuotas y salarios», la competencia era escasa. «El mejor hombre de negocios no era el que mejor manejaba la empresa, sino el que hacía mejor lobby», explicaba Daniel Platovsky, más tarde presidente de la Cámara Chilena de Comercio, cuya familia era dueña de una fábrica de televisores en 1970. En ese tiempo, el capitalismo «a lo compadre» no era empresarial ni eficiente, cuestión que volvía plausible el argumento de la izquierda: su día había llegado. Diversos estudios demostraban que la propiedad en los diferentes sectores económicos estaba altamente concentrada, lo mismo que las cuotas de mercado, mientras las mismas empresas no eran competitivas ni creativas.

La solución socialista de la Unidad Popular era formar un «Área de Propiedad Social y Mixta» (APS), bajo el control de la CORFO, compuesta por las mayores y más estratégicas empresas chilenas. Algunas de ellas pasarían a ser propiedad del Estado.

otras serían de propiedad compartida pública y privada. En cuanto a la administración, todas contarían con la participación de los trabajadores y de administradores del Gobierno para asegurar que funcionaran en sentido del interés público, y no con el propósito de maximizar las ganancias privadas. Tal como en el caso de los bancos, el Gobierno de Allende estaba más que dispuesto a comprar la parte privada de estas empresas, pero estas, en su mayoría familiares, estaban en manos de propietarios no muy dispuestos a vender y sí, en cambio, a unirse para resistir.

En esos casos, el gobierno de Allende estaba dispuesto a usar el poder ejecutivo que le conferían antiguos decretos, dictados con motivo de la Gran Depresión de los años treinta, para nuevos propósitos. Esos decretos facultaban al Gobierno para intervenir en el manejo de las empresas privadas cuando la producción de artículos de primera necesidad estuviese amenazada por actuaciones de los administradores o dueños o cuando hubiera un conflicto del trabajo que no pudiera ser resuelto. Dicha intervención sería de duración indefinida y debía ser aceptada por los antiguos dueños, una vez que el problema fuera resuelto. Con Allende en la presidencia, una vez que el interventor se hacía cargo de una empresa, se multiplicaban los incentivos para que sus dueños la vendieran, ya fuera por los grandes aumentos de sueldo prometidos a los trabajadores, por las deudas provenientes de operaciones o por la compra de maquinarias y repuestos. Además, el Gobierno dejaba en claro que la intervención continuaría hasta que los dueños accedieran a vender.

Al principio, el tamaño y alcance del área de propiedad social era vago, algo que reflejaba las diferencias que existían dentro de la Unidad Popular. Los socialistas no querían delimitar el APS, esperando expandirla lo más lejos posible, mientras los comunistas que estaban interesados en una alianza con la clase media y «la burguesía nacional progresista» eran sensibles a la necesidad de calmar las ansiedades de los dueños de empresas medianas. Finalmente, el APS fue definida para empresas con un capital superior a un millón de dólares —una gran suma en el Chile de 1970, es decir, un total de noventa y un empresas— «las 91» de la propaganda de la Unidad Popular. Después de un año de presidencia de Allende, setenta empresas estaban en manos del Gobierno, pero muy pocas habían sido compradas e integradas definitivamente al área de propiedad social. La legalidad de estas acciones sería un punto de conflicto en el futuro. Por una parte, la revolución desde arriba era altamente legalista, concordante con la cultura política de Chile. Esto significaba que las estrategias para una revolución desde abajo tenían que ser legales —o por lo menos aparentemente legales— en una situación en que el control opositor del Congreso limitaba la posibilidad de legislar sobre estos cambios.

El uso de decretos supremos por parte del Ejecutivo para intervenir indefinida —pero de hecho permanentemente— en la administración de empresas privadas para

propiedad
f. p. p. p.

Apuntes
Social
y Mixta

→ compra emp. públicas → aquí empresas se negaron a vender → aplicas de viejo decreto de 1933 para reanudar

importancia a la
base
del
golpe

forzar a sus propietarios a venderlas al Estado, llevaba los poderes presidenciales al límite legal. En efecto, a juicio de la oposición de centro-derecha, Allende lo traspasaba. Eventualmente, esto condujo a un conflicto que no pudo ser resuelto y se convirtió en la excusa que tuvo la oposición que controlaba la Cámara de Diputados para declarar al Gobierno de Allende inconstitucional en agosto de 1973, legitimando el golpe militar que vendría unas semanas después. En 1971, sin embargo, con la revolución avanzando y sus opositores en desorden, el Gobierno de Allende podía celebrar las estrategias que le daban el control sobre los puestos de mando de la economía, que ahora trabajarían para «la gran mayoría de los chilenos» y constituirían el núcleo de la economía socialista en el Chile del futuro.

Ganar el control de las «alturas dominantes» de la economía era un paso de gigante hacia el socialismo, pero el camino democrático requería también una mayoría electoral. El 36 % de la votación a favor de Allende en 1970 y el 40 % de los parlamentarios del Congreso elegidos por la Unidad Popular en las elecciones de 1969 eran indicadores de que se estaba muy lejos de alcanzar la mayoría electoral y parlamentaria que permitiera legislar una transición al socialismo según la estrategia de la Unidad Popular.

El control de los puestos de mando de la economía tenía un rol clave, era una manera de debilitar la base de los enemigos políticos del socialismo en Chile, así como de demostrar la superioridad del socialismo por sobre el capitalismo. Sería un largo proceso y la Unidad Popular proyectaba alcanzar una mayoría electoral para el socialismo como el objetivo del gobierno de seis años de Salvador Allende, haciendo posible entonces una futura transición democrática.

Sin embargo, los cambios en la estructura económica de Chile eran solamente parte de la estrategia política de la Unidad Popular, ya que habría importantes elecciones antes que Allende terminara su mandato. Una de ellas, fueron los comicios municipales en todo el país en abril de 1971. En 1965, los demócratacristianos habían usado el fuerte aumento de su votación en las elecciones parlamentarias, pocos meses después de que Frei fuera elegido presidente, para sostener que era un mandato para llevar a cabo su «revolución en libertad». Aunque las elecciones municipales de abril de 1971 no alteraban la composición del Congreso, para todos sería un veredicto popular sobre el Gobierno de Allende y sus políticas, y sobre la vía chilena de la Unidad Popular. Serían elecciones locales que se pronunciarían sobre temas nacionales de acuerdo a las orientaciones de los partidos.

En abril de 1971, las expectativas políticas para la Unidad Popular habían mejorado significativamente. La economía estaba respondiendo a las políticas nekeynesianas de Vuskovic. Aumentaba la tasa del crecimiento, bajaba el desempleo y volvía la prosperidad. Además, el alza de los salarios reales permitía que los chilenos compraran cosas que antes estaban fuera de su alcance, creando «fiestas de consumo» como las

llamaban los medios. Estos cambios económicos beneficiaban a los trabajadores y a los campesinos, pero también a los sectores medios, mientras que los costos eran pagados solamente por el pequeño grupo de las élites económicas.

Igualmente importante en el giro del espectro político hacia la izquierda era la creciente comodidad y confianza en Salvador Allende y su Gobierno que experimentaban los chilenos que no habían votado por él, incluyendo los sectores medios. En parte, este cambio de posición reflejaba la restauración de la estabilidad política, principalmente la habilidad y el estilo de los primeros cinco meses de Allende como presidente de la república, con su moderación y contención por una parte, pero, por otra, con acciones audaces y decisivas, todas inspiradas por una aguda y matizada comprensión de Chile, su pueblo y sus instituciones. Este extraordinario desempeño llevó a Volodia Teitelboim, veterano dirigente comunista y agudo observador de la política chilena desde los años treinta, a decir que los primeros cinco meses de la presidencia de Allende fueron «los más brillantes de la historia de Chile».

Al mismo tiempo, esos logros iniciales producían un gran cambio en la opinión pública. Cuando el 4 de abril de 1971 se contaron los votos, la Unidad Popular había obtenido la mitad, levemente más que la suma de los votos demócratacristianos, derechistas del Partido Nacional y radicales democráticos. Fue un gran salto para la izquierda, que por primera vez en la historia de Chile obtenía la mayoría en una elección nacional. Eso significaba que muchas personas de clase media y, más aún, obreros, campesinos y pobladores, apoyaban ahora a la Unidad Popular.

Así como la estrategia política de la Unidad Popular de ganar a la mayoría para el socialismo hacía pensar en una alianza de clase entre obreros, campesinos y clase media, el cambio en la opinión y las lealtades políticas de esta última era visto como un indicador clave de la viabilidad de la vía chilena. Aún más, era un veredicto positivo para «los cambios» que el Gobierno de Allende había empezado a poner en práctica. Ahora la Unidad Popular podía afirmar que tenía el respaldo popular necesario para transitar su camino democrático al socialismo.

Esto permitía también revisar el programa para el socialismo. Esta ola izquierdista representaba un cambio sísmico en la política chilena, terminando con los «tres tercios» en que tradicionalmente se había dividido el electorado. Además, la Unidad Popular había desbordado su lugar y tenía el momento a su favor. Si este cambio continuaba —y pocos de sus dirigentes dudaban de que lo haría— se consolidaría en Chile una mayoría electoral por el socialismo mucho antes de que Allende terminara su mandato presidencial de seis años. Entonces sería posible a corto plazo, quizá dentro de un año, convocar a un plebiscito constitucional para reemplazar el Congreso bicameral por una «asamblea del pueblo» unicameral, cuya composición reflejara el giro hacia la izquierda. Esto permitiría a la Unidad Popular aprobar leyes para una transición democrática al socialismo durante el gobierno de Allende.

Fue esta proyección postelectoral lo que llevó a Allende a rechazar la propuesta de Tomic de establecer una «alianza de todas las izquierdas», que los demócratacristianos habían rechazado a su vez en 1959 pero que ahora podían aceptar dado el cambio de circunstancias políticas de abril de 1971. La euforia que siguió a las elecciones municipales parecía indicar que no había razón para comprometerse con los demócratacristianos, por el contrario, la Unidad Popular esperaba que muchos de los votos que consolidarían la mayoría electoral que estaba a punto de conseguir provendrían de la Democracia Cristiana, a quien esperaba debilitar y dividir a medida que se polarizara la política chilena y los partidarios del ala izquierda de Tomic se unieran a Unidad Popular. Las elecciones de abril de 1971 hicieron pensar a muchos que todo era posible, y una estrategia «maximalista» de empujar los cambios hasta el límite comenzó a adquirir fuerza.

Pero Allende era más cauteloso. Creía que su revolución desde arriba, realizada por fases, controlada y bien ejecutada, era la responsable de este aumento en el apoyo a la izquierda y la estrategia que consolidaría esa mayoría electoral que le permitiría legislar sobre el socialismo del futuro. El manejo de los tiempos y la disposición de la secuencia de los hechos eran fundamentales para que la Unidad Popular pudiera aislar a sus adversarios y enfrentarlos uno a uno: primero al capital internacional, luego a las diferentes facciones de la burguesía chilena. Sería posible sacar ventaja de las rivalidades y contradicciones del campo enemigo —en el cual el capital nacional se resentía de los mayores recursos de las corporaciones extranjeras con las que tenía que competir, y las empresas chilenas más pequeñas sufrían a menudo la despiadada dominación de los mercados, el capital y las inversiones de las más grandes— para estimular la creencia de que, al no ser atacado, los intereses de este grupo serían considerados o renegociados y convertidos en empresas mixtas, lo cual conjuraba una alianza contrarrevolucionaria que pudiera bloquear el camino democrático al socialismo o reducirlo a una velocidad mínima o desviarlo por la fuerza. Más aún, para el éxito de esta estrategia era fundamental que se mantuviera viva la impresión de que Allende era un político con el que se podía negociar.

En abril de 1971, después de las elecciones municipales, Allende parecía seguir avanzando triunfante y tranquilamente. Todo lo que tenía que hacer era continuar esta revolución controlada desde arriba por etapas y secuencias para completar el camino democrático al socialismo. Pero lo que no había tomado en cuenta era la revolución desde abajo.

La revolución desde abajo

A pesar de sus diversos caracteres, estrategias y tácticas, los distintos elementos de la revolución desde arriba del Gobierno de Allende compartían dos importantes rasgos. Todo tenía que ser hecho por medios legales. Todo tenía que ser diseñado, orquestado y controlado desde por funcionarios del Gobierno que ajustarían sus tácticas y tiempo para asegurar que fueran compatibles con las condiciones objetivas y la estrategia general de la vía chilena.

Sin embargo, los tiempos, la secuencia, la proyección y el control de esta planeada revolución fueron desafiados y transformados por la erupción de una imprevista «revolución desde abajo», acelerada y profundizada por obreros, campesinos y pobladores. Este proceso coincidía a menudo o se complementaba con la revolución legalista y modulada, pero divergía crecientemente de ella, porque era más espontáneo e interactivo con las bases, y resultaba difícil controlarlo desde arriba. Si el sello de la primera era el legalismo, el de la revolución desde abajo era la toma, una apropiación formalmente ilegal pero socialmente justa. En la revolución chilena, la mayoría de las tomas se hicieron en los terrenos en que la gente vivía o trabajaba —o esperaba vivir o trabajar—, como por ejemplo terrenos suburbanos desocupados que eran invadidos por pobladores sin casa, fundos de gran tamaño que eran ocupados por campesinos sin tierra, fábricas que pasaban a ser controladas por sus propios trabajadores, o «corridas de cercos», por parte de activistas mapuches, que desplazaban los límites de sus propiedades hasta donde habían estado antes de que los terrenos les fueran arrebatados un siglo antes.

Más allá del común denominador de la toma, la revolución desde abajo era diversa y difícil de generalizar. En parte, expresaba la frustración de muchos chilenos ante el fracaso de la «revolución en libertad» de Frei y su impaciencia por la lentitud, el legalismo y las limitaciones de las transformaciones planificadas por Allende.

Para la mayoría, la revolución desde abajo reflejaba la manera en que el pueblo chileno entendía el «triunfo popular» de Allende en las elecciones y su «gobierno popular» como la única oportunidad que tenían de realizar sus sueños. Esos sueños tendían a ser muy concretos: en el caso de los pobladores, «una casa digna»; en el caso de los campesinos, tierra propia; en el caso de los indígenas, la tierra que perteneció a sus ancestros, y en el caso de los trabajadores industriales, el control y la nacionalización de su fábrica.

La transformación de las expectativas populares que dieron origen a la revolución desde abajo comenzó durante la campaña electoral, y Allende fue en parte responsable. En la fábrica textil algodonera Yarur, por ejemplo, esas expectativas fueron verbalizadas en su discurso. En la misma fábrica, frente a Amador Yarur, su dueño omnipotente y odiado, Allende se dirigió a los quinientos trabajadores que desafiaban a los guardias

Allende
NO
del
reprimen
pueblo

de seguridad armados y a los soplones, prometiéndoles que si era elegido les quitaría la fábrica a los Yarur, ya que esta «pertenece a los trabajadores y al pueblo de Chile». Un año después, los trabajadores citarían esta promesa al cerrar la fábrica y exigir su estatización.

Para la mayoría de los chilenos, sin embargo, las palabras que les dieron licencia para impulsar la revolución desde abajo fue la declaración de Allende de que como presidente —a diferencia de sus predecesores— no usaría la fuerza del Estado para reprimir al «pueblo». Para los pobladores que buscaban una casa propia, para los mapuches que anhelaban recuperar sus tierras, para los campesinos a los que se les había prometido los terrenos que trabajan, las palabras de Allende eran una casa propia, para los podían tomar la revolución en sus propias manos y hacer realidad sus sueños sin miedo a la represión. Muchos de ellos creían que haciéndolo también estaban avanzando en el «proceso revolucionario» y, aun sabiendo que Allende se oponía, a menudo no quisieron detenerse, enlentecer o renunciar a sus objetivos, creyéndose ante una oportunidad única en la vida. Inmersos en el proceso, profundizaban su propia comprensión de la democracia, el socialismo y sus propios derechos sociales y económicos. También se hicieron protagonistas de su propio destino y fueron participantes activos del proceso revolucionario y de su política, y no ya clientes pasivos o meramente bases de apoyo para los partidos, los sindicatos o sus líderes.

En algunos casos, los artífices de la revolución desde abajo se veían a sí mismos como «los verdaderos revolucionarios» y a los líderes de la revolución desde arriba como simples «reformistas». Las tensiones desarrolladas entre las revoluciones de abajo y de arriba nunca se resolvieron plenamente. Por todas estas razones la revolución desde abajo alteraría significativamente la proyección, la secuencia, la disposición temporal, las tácticas y la estrategia de la revolución chilena, así como también su carácter y su trayectoria.

La revolución desde abajo y sus tomas de terrenos baldíos en los suburbios de las principales ciudades de Chile comenzó mucho antes de la llegada de Allende a la presidencia. Fue el aspecto más familiar este proceso en Chile: hacía más de dos décadas que personas sin hogar en busca de una «casa digna» se tomaban sitios. Eran hechos que reflejaban el enorme déficit habitacional y la masiva migración rural que era la causa principal de esta crisis de viviendas, junto con la falta de una política habitacional adecuada por parte de los gobiernos de la época.

Lo que era diferente ahora era la masividad de las tomas, la organización de los pobladores y el grado en que muchas fueron parte de un proyecto político de mayor alcance. Las tomas de sitios empezaron a incrementarse con el fracaso del programa de vivienda de Frei, que había prometido entregar doscientas cuarenta mil unidades habitacionales a pobladores de bajos ingresos. Estas apropiaciones se aceleraron

durante las campañas de 1969-70 y tuvieron un nuevo salto después de que Allende comenzara su gobierno. Entre 1968 y 1971, hubo más de cuatrocientas tomas de sitios en Chile y, a fines de 1971, un sexto de la población de Santiago estaba viviendo en campamentos provisionales (en carpas o mediaguas) que eran producto de tomas. Si bien muchos de ellos eran organizados por partidos políticos, movimientos sociales y algunos representaban un proyecto que iba más allá de «una casa digna», todos reflejaban la urgencia y masividad de la crisis de vivienda en Chile.

El Partido Comunista fue durante décadas la fuerza política que estaba detrás de la organización de muchas de esas tomas, con el propósito de ganar partidarios, «aumentar fuerzas» y avanzar en el proceso revolucionario. Pero fue el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), el movimiento guevarista a la izquierda de la Unidad Popular, el que vio más seriamente a los campamentos como proyecto político revolucionario durante la época de la Unidad Popular. El MIR había sido fundado por estudiantes de la Universidad de Concepción en la estela de la Revolución cubana, incluyendo a hijos de dirigentes del Partido Socialista, cuya ala izquierda parecía a veces traslaparse con el MIR. En los años finales de los sesenta, este movimiento se preparaba para una guerra de guerrillas, robando bancos y comprando armas.

El MIR sostenía que Allende no podría ser elegido y era escéptico de la viabilidad de la *vía chilena*, que veía como más reformista que revolucionaria. Sin embargo, una vez que Allende llegó a ser presidente, el MIR adoptó una posición de apoyo crítico a su camino democrático al socialismo.

Dejó de lado sus preparativos para la lucha armada y destinó sus limitados pero talentosos y altamente calificados recursos humanos a radicalizar la revolución chilena desde abajo, a través de frentes de masas como el Movimiento de Campesinos Revolucionario (MCR) o el Movimiento Revolucionario de Pobladores (MRP) grupos que, a diferencia de los trabajadores industriales, todavía no habían sido organizados por comunistas y socialistas. El MRP no solamente promovía y ayudaba a organizar tomas en terrenos suburbanos no ocupados; trataba también de organizar los campamentos resultantes como comunidades revolucionarias bajo el control del MIR.

Uno de los más emblemáticos era el campamento Nueva La Habana, a los pies de la cordillera los Andes en Santiago. Ya su nombre revelaba su inspiración, su modelo y su propósito. Mientras la mayoría de los campamentos, producto de tomas, parecían no planeados, Nueva La Habana, estaba ordenada con calles rectas que se encontraban en ángulos también rectos y convergían en espacios públicos. Cada una de sus veinticuatro manzanas tenía una sede social. Con el tiempo llegó a albergar a unas mil quinientas familias, más o menos nueve mil personas.

Para bajar los costos de construcción, pero sobre todo para elevar el nivel de conciencia a través de la cooperación del grupo, inicialmente ocuparon solo una

parte de la tierra, y construyeron sus casas en la parte vacía. Cada familia construyó su propia vivienda, contando en caso de necesidad con la ayuda de una «brigada» de trabajo del campamento. Avanzaron mucho más cuando el Gobierno de Allende puso en práctica su nueva política de «ejecución directa» — como resultado del diálogo entre la revolución desde arriba y la revolución desde abajo — que dio a los pobladores materiales de construcción y les pagó para que construyeran su casa definitiva, evitando así las demoras y los altos costos de la construcción privada enfilada al lucro que había limitado el programa habitacional de Frei, y capacitando a los pobladores como trabajadores de la construcción, lo que disminuía el desempleo. Era comprensible el orgullo de las familias instaladas en sus casas, pero a la vez podía verse como un ejemplo exitoso de colaboración entre la revolución de arriba y la de abajo.

El involucramiento del MIR en campamentos tales como Nueva La Habana y el de los comunistas y socialistas en otras poblaciones producto de tomas, subrayan que rara vez la revolución desde abajo fue completamente espontánea o plenamente autónoma. Pero la espontaneidad y la relativa autonomía fueron características de la revolución desde abajo en contraste con la revolución desde arriba. Los dirigentes de los campamentos, elegidos por su activismo local, eran a menudo militantes políticos y a veces sentían las tensiones inherentes a este dualismo de roles. Pero ningún campamento, ni siquiera Nueva La Habana, estaba compuesto enteramente por militantes o simpatizantes de un solo partido, y esto limitaba el alcance del control político. Esta relativa autonomía de la revolución desde abajo fue verdadera en la mayoría de las cientos de tomas de sitios, campamentos y poblaciones de la era de Allende y de los cientos de tomas de tierras rurales ocurridas también en esos años.

Irónicamente, la revolución rural desde abajo no partió en el Valle Central de Chile, el corazón del latifundio y el blanco principal en 1967 de la reforma agraria demócratacristiana. Empezó más bien en el sur forestal, la patria de los mapuches, el mayor grupo indígena chileno, que resistió con éxito la conquista europea durante la colonia. Finalmente, los mapuches fueron conquistados por las armas modernas entre los años 1870 y 1880, una empresa consolidada por inmigrantes alemanes acostumbrados a las condiciones de los Alpes.

Durante el siglo que siguió, los mapuches fueron perdiendo más tierras debido a la política del Gobierno chileno, a los inmigrantes europeos, los tribunales y los políticos corruptos. Hacia los años de 1960, este pueblo antiguamente fiero fue reducido a la pobreza, muchos de sus jóvenes emigraron a las ciudades para sobrevivir y su cultura también estuvo en peligro.

Ante esta calamitosa situación, algunos mapuches sostuvieron la primacía de la defensa de la cultura, mientras que otros fueron convencidos por los argumentos de clase de la izquierda — tanto demócratacristiana como marxista — en relación con la necesidad de aliarse con otros campesinos pobres para conseguir sus tierras.

Cuando la reforma agraria demócratacristiana, centrada en los grandes latifundios del Valle Central, no llegó hasta ellos, y cuando Allende prometió que no habría represión contra el pueblo, muchos mapuches decidieron tomar la revolución en sus manos. Poco después del comienzo del gobierno de Allende, los mapuches empezaron lo que se llamó «la corrida de cercos». Al amanecer se reunían junto al cerco que dividía las tierras de sus reducidas propiedades, con sus chamanes mujeres, las «machis», y trompetas de cuerno de vacuno y, armados con poco más que palos, sacaban las cercas y las movían hasta donde estaban antes de que, en el siglo XIX, les robaran la tierra. Estas acciones, formalmente ilegales pero motivadas por una profunda sensación de injusticia, ya eran fuertes desafíos al statu quo, pero otros mapuches fueron más allá y se tomaron terrenos que incluían predios demasiado chicos para ser afectados por la ley de reforma agraria de 1967.

La comunidad de Nicolás Ailío había sido víctima de robos de tierras durante casi un siglo. Había recurrido a los tribunales, pero los juicios que se habían prolongado durante décadas e, incluso cuando habían ganado, la riqueza y la influencia política de los europeos y chilenos que les habían robado la tierra, les habían impedido recuperarla. Sin embargo, cuando Allende empezó a gobernar y se sintieron fortalecidos para actuar y reparar esta injusticia, decidieron tomarse de las tierras del fundo Rucalán, que eran de mucho mayor tamaño. Por una parte, la elección de llevar a cabo la toma reflejaba la inspiración de otras tomas exitosas en la región, pero, por otra, reflejaba el involucramiento de mapuches de otras comunidades. Para la mayoría, sin embargo, era ante todo el reflejo de una pobreza y un crecimiento de la población para los cuales recuperar las treinta y cinco hectáreas que les habían robado no resolvía nada.

Heriberto Ailío, un líder de la comunidad en la toma de Rucalán estaba muy consciente de su pobreza. Era central para él aceptar el análisis de clase del MIR, que lo llevó a ser en la región uno de los fundadores de su frente de masas campesino. Fue el MCR el que ayudaría a organizar la toma del fundo Rucalán un mes después de la toma de posesión de Allende.

La toma de Rucalán, llevada a cabo el 19 de diciembre de 1970, fue «no violenta» a pesar de que los mapuches estaban «armados», en su mayoría con palos y al menos un mirista con una pistola. Incluso se preocuparon de la seguridad de las mujeres que estaban en la casa, asegurándoles que no corrían peligro y dándole tiempo al dueño del fundo, Juan Bautista Landerretche, para que preparara maletas con ropas y joyas, y se las llevara de ahí en dos automóviles.

Por su parte, la violenta recuperación del fundo, cinco días más tarde, encabezada por sus dueños el día antes de Navidad, dejó a tres mapuches heridos e hizo huir a mujeres desarmadas y a niños aterrorizados. La violencia y los heridos transformaron la toma y recuperación de Rucalán en una de las primeras escaramuzas de la guerra civil entre revolución y contrarrevolución en Chile. Los medios derechistas la presentaron

como una agresiva conspiración mirista, prueba también del clima de violencia creado por la Unidad Popular en su aparente vía pacífica al socialismo, y como un ataque a la propiedad privada.

Para el Gobierno de Allende, que había adoptado una actitud de espera frente a la toma, la violencia de la recuperación creó un conflicto social que requirió de resolución inmediata, ya que Rucalán no era un predio candidato a ser expropiado de acuerdo a la ley de reforma agraria de 1967. La confrontación en la zona rural de Cautín también alertó a la Unidad Popular de que se estaba intensificando el conflicto en el campo, amenazaba con escapar de control y causar graves problemas a la vía chilena. Como consecuencia, en los primeros días de 1971, Jacques Chonchol trasladó el Ministerio de Agricultura a Cautín durante cuarenta y cinco días y anunció su propósito de aplicar la ley de reforma agraria a fondo en esa provincia. En pocos días anunció cientos de expropiaciones en Cautín y el 4 de febrero expropió Rucalán y otros fundos propiedad de Landerretche que juntos sumaban más del mínimo legal para la expropiación.

Se esperaba que la finalización de la reforma agraria en Cautín pusiera término definitivo al conflicto social en la región e indicara también que la Unidad Popular cumplía con llevar adelante su revolución en forma legal. Los campesinos de otras regiones, sin embargo, vieron esas acciones como un mensaje diferente. Vieron que la ola de tomas en Cautín, y el conflicto social que había creado, había obligado al Gobierno a acelerar e intensificar la reforma en la provincia, dándole prioridad sobre otras áreas e incluso expropiando terrenos que no eran lo suficientemente extensos para quedar dentro de la ley de 1967.

Para los campesinos cuyas expectativas de ser dueños de la tierra que trabajaban habían sido estimuladas y luego defraudadas por los demócratacristianos, las implicaciones eran claras. El camino para asegurar que se beneficiarían con la reforma agraria de la Unidad Popular —lo antes posible— era apoderarse de la tierra, creando un conflicto social que el Gobierno tendría que resolver aplicando la ley. El resultado fue que pronto la ola de tomas de tierras se extendió hacia el norte, al Valle Central, donde los protagonistas fueron campesinos mestizos, y los terratenientes afectados incluían a miembros prominentes de la élite latifundista de Chile, lo que garantizaba que la revolución rural desde abajo seguiría tanto en las portadas de la prensa derechista como entre las prioridades de sus políticos.

Para la Corporación de Reforma Agraria (CORA), la agencia estatal encargada de llevar a cabo la reforma agraria de 1967, esta ola de tomas tenía ciertas ventajas. Con campesinos ocupando un predio y con el Gobierno que no quería usar la fuerza para sacarlos y, además, sin tolerar violentas recuperaciones, la CORA estaba en una posición más fuerte para negociar la expropiación y compensación con los antiguos dueños. Aún más, la ley de reforma agraria no cubría la expropiación del ganado ni de la maquinaria.

El capital de explotación de un predio rural, que tenía un costo considerable, no podía ser afrontado ni por los campesinos pobres ni por el Gobierno. Pero una toma exitosa también incluye la maquinaria y el ganado, lo que colocaba a la CORA en una buena posición para negociar su compra con los antiguos propietarios.

Vista desde esta óptica, en el campo la revolución desde arriba y la revolución desde abajo eran simbióticas.

Para la Unidad Popular, sin embargo, la revolución que se extendía en el campo creaba un conjunto de problemas económicos, sociales y políticos que se reforzaban mutuamente. Desde el punto de vista económico, la intensificación y aceleración de la reforma agraria significaba un alza de costos de transición en un momento de déficit presupuestario, y de una declinación mayor de la producción agraria en un tiempo en que el aumento de ingresos producía una mayor demanda de alimentos, obligando al Gobierno a utilizar sus limitadas reservas de moneda extranjera para importarlos. Socialmente, la revolución desde abajo amenazaba a la estrategia central de alianza de clases de la vía chilena. Al tomar las tierras en que trabajaban, los campesinos tenían dificultades para calcular si ellos ocupaban más del límite legal de las ochenta hectáreas regadas de la mejor tierra o su equivalente, que implicaba el dominio de una complicada fórmula técnica que podía exceptuar de la expropiación a fundos muy extensos. Además, a los campesinos no les interesaba hacer ese cálculo. El resultado era que muchos predios de tamaño insuficiente para ser expropiados bajo la ley eran afectados por tomas, empujando a sus dueños a la contrarrevolución para recuperarlos y creando ansiedad incluso entre los pequeños propietarios que creían que también podían perder sus tierras en una revolución que el Gobierno, según era evidente, no quería o no podía controlar. Políticamente, esto significaba que, en un Chile polarizado, la división podía calar demasiado hondo en la escala social para consolidar una mayoría a favor del socialismo. Aún más, amenazaba internamente a la Unidad Popular, ya que los dueños de los pequeños y medianos predios eran una importante base social para el Partido Radical, cuya representatividad senatorial y carácter de clase media lo hacían un miembro clave de la coalición de gobierno y de su estrategia de alianza de clases.

Esto se pudo ver claramente en Melipilla, una zona conservadora cerca de Santiago, en marzo de 1972 cuando un organizado movimiento campesino tomó el control de todos los grandes fundos de la provincia en una coordinada acción masiva. La cercanía de Melipilla con la capital, la extensión de la toma y la fortuna y el estatus de los terratenientes hicieron del conflicto una famosa causa nacional en que la prensa derechista se concentró durante días, especialmente cuando los dirigentes campesinos de la toma fueron arrestados por orden de un juez local perteneciente a la élite y sus partidarios campesinos respondieron con una ocupación pacífica del juzgado, que figuró en los titulares de la prensa como «la toma del juzgado de

"Toma del fundo"
*

Melipilla». Como de costumbre, se culpó a misteriosos miristas por instigar y dirigir las tomas tras bambalinas, y el Gobierno de Allende fue atacado por promocionar un clima de violencia que ahora se había movido desde el campo al tribunal, afectando indistintamente a jueces y dueños de fundos. Sin embargo, la historia interna era diferente: el grupo que había organizado la toma era el sindicato campesino local dominado, no por el MIR, sino por el más moderado MAPU, como parte de una paradójica estrategia de la Unidad Popular para terminar con la inquietud rural y el crecimiento del MIR, que aceleró la revolución en vez de sosegarla.

La respuesta de la Unidad Popular al problema planteado por una revolución rural desde abajo, provocada por el hambre de tierra, fue acelerar e intensificar la revolución rural desde arriba. En abril de 1972, por ejemplo, la CORA expropió todos los latifundios en la provincia de Talca, en el corazón del Valle Central, en un solo día, ante una audiencia de expectantes campesinos vestidos con su ropa de domingo en el estadio de la ciudad. A la entrada de la ciudad un cartel proclamaba «El fin del latifundio en Talca».

El resultado de esta acelerada e intensificada reforma fue enorme, como producto de la interacción mutuamente reforzada entre las dos revoluciones rurales que hemos descrito. Era la más rápida y arrolladora reforma agraria hecha en la historia sin una revolución violenta. Fue tan acelerada y aplastante que Chou En-lai, el dirigente revolucionario chino, le advirtió a Allende que estaba yendo demasiado lejos y demasiado rápido, como señalamos en la introducción. A mediados de 1972, el latifundio que había dominado el campo desde la época colonial y era la base histórica de la élite, había terminado. La simbiótica relación entre la revolución desde arriba y la revolución desde abajo había transformado el campo chileno.

Las tomas de sitios desocupados por personas sin casa pueden haberse multiplicado durante la era de Allende, pero habían sido parte de la escena nacional durante muchos años y no eran incompatibles con la *vía chilena*. Las tomas de tierra en el campo habían sido escasas antes del gobierno de la Unidad Popular, pero aun así no eran completamente desconocidas. Además, su simbiosis con la estrategia de expropiación por parte de la CORA la habían hecho —en general— compatible con la revolución desde arriba. Sin embargo, las tomas de fábricas eran desconocidas en Chile antes de la presidencia de Allende, salvo por la escasamente posible excepción de industrias abandonadas por sus dueños, como pasó con Bellavista Tomé. Entonces, la toma de la fábrica Yarur, la fábrica textil de algodón más grande de Chile, por parte de sus trabajadores el 28 de abril de 1971, y su demanda para que la industria fuera estatizada, conmocionó al país y enfrentó a Allende y su revolución desde arriba con un desafío mayor.

Tal como la toma del fundo Rucalán, la toma de Yarur siguió y reflejó una lógica y una dinámica local —aunque dentro de un contexto nacional que la estimulaba—.

Yarur era una empresa familiar manejada por un patrón personalista y paranoide, Amador Yarur, conocido por su autoritarismo y comportamiento antisindical, en el que empleaba soplones, guardias armados y un sindicato amarillo que operaba en la empresa. Era también una fábrica en que los obreros se sentían explotados y enajenados por una combinación de bajos salarios y un taylorismo regulado por normas que estandarizaban el trabajo intensificado, lo que convertía a los obreros en extensiones de las múltiples máquinas que debían atender.

El sueño de un sindicato independiente que los representara había llevado a una nueva generación de trabajadores de Yarur a organizar un movimiento clandestino en la fábrica durante la campaña presidencial de 1970. Con el apoyo del nuevo Gobierno de Allende, este movimiento ganó las primeras elecciones honradas que se realizaban en una década y formó el primer sindicato de empleados de esta empresa. Pero Amador Yarur rehusó reconocer a la nueva directiva del sindicato de obreros, como asimismo se negó a aceptar el de empleados. Con ello, continuaba con su política de quebrar sindicatos, como lo había hecho en el pasado, pero en un contexto nacional que hacía que sus consejeros más cercanos le recomendaran una conducta conciliadora. Entretanto, la embriagadora experiencia del «triunfo revolucionario» combinada con la prolongada intransigencia de su patrón en el contexto nacional de un «gobierno de los trabajadores» y de la «vía chilena al socialismo» radicalizaron y dieron confianza a los dirigentes sindicales, que presentaron un pliego de peticiones a Amador Yarur que se convirtió en ultimátum cuando este se negó a negociar. Lo que sigue después fue una «huelga de control» en la cual los trabajadores cerraron la fábrica y no permitieron entrar ni salir a nadie mientras no fuera estatizada por Allende.

Aunque la toma de Yarur reflejaba una lucha local, estaba inserta en un contexto más amplio, nacional. Los dirigentes de Yarur habían estado trabajando durante semanas junto a altos funcionarios del Ministerio de Economía que estaban crecientemente preocupados por lo que veían como esfuerzos de los capitalistas chilenos para socavar la estrategia económica del Gobierno de Allende y derrotarla «saboteando la producción». Los dirigentes sindicales de Yarur habían estado recopilando datos sobre paralización de máquinas y bajas de abastecimientos y repuestos. En abril, Vuskovic y su ministerio querían intervenir Yarur por motivos económicos y habían decidido que este era el mejor caso para justificar una requisición legal por irregularidades financieras y sabotaje a la producción.

Los argumentos políticos para actuar en cautela desaparecieron con los resultados de las elecciones municipales del 4 de abril de 1971, cuando la Unidad Popular ganó la mayoría de los votos válidamente emitidos.

Incluso los líderes de la Unidad Popular se rindieron al triunfalismo que veía en esta votación un mandato para el cambio y para dar un salto cualitativo en el camino chileno al socialismo. Para el Partido Comunista, que había liderado y que había perdido

fuera de
aun
pueden
completar

toma
de fábrica
por

las luchas anteriores en la empresa de Yarur, esta era un lugar simbólico para iniciar la lucha contra los capitalistas industriales. Para los socialistas, que habían empezado y conducían el movimiento de los trabajadores de Yarur, esta era una fábrica estratégica y una manera de utilizar la revolución desde abajo para radicalizar la revolución desde arriba. El MAPU, que era el tercer mayor partido de izquierda durante la Unidad Popular, también estaba representado por dirigentes sindicales y por Oscar Guillermo Garretón, el subsecretario de Economía, encargado de la relación con Yarur. Por su parte, los dirigentes sindicales de Yarur respondían a una situación local, con su lógica y dinámicas propias, pero estaban estimulados por los principales partidos de la Unidad Popular, así como por el ministro más importante del Gobierno de Allende y la Central Única de Trabajadores (CUT), quienes estaban sin embargo preocupados de que la situación revolucionaria estuviera a punto de estallar en la fábrica.

Finalmente, los trabajadores de Yarur recordaban la promesa pública de nacionalizar la empresa que Allende les había hecho durante la campaña de 1970. Al tomar el control de la industria en abril de 1971 y pedir a Allende que la socializara, creían que estaban ayudando al «proceso revolucionario» y ayudando también a Allende para que hiciera lo que había prometido si era elegido: «Quitarle la industria a Yarur» y dársela «a sus trabajadores y al pueblo de Chile».

Para Allende, sin embargo, la toma por los trabajadores de la fábrica textil de algodón más grande de Chile, el 28 de abril de 1971 y la demanda de estatización amenazaban su estrategia de revolución desde arriba, controlada y por etapas, en la cual la incorporación de industrias manufactureras al área de propiedad social debía hacerse cuando se hubiera terminado la compra y expropiación de los bancos y empresas extranjeras para dividir, aislar y neutralizar sucesivamente a sectores de la burguesía nacional durante la transición al socialismo. Esa fue la razón por la cual —a pesar de su promesa de campaña— resistió fuertemente la demanda de los trabajadores de quitarle la empresa Yarur a sus dueños e incorporarla inmediatamente al área de propiedad social.

Igualmente importante para Allende fueron las preguntas fundamentales que le hicieron los trabajadores de la toma de Yarur acerca del liderazgo revolucionario, a quienes respondió que «los procesos [revolucionarios] exitosos se hacían con una dirección férrea, consciente, no al lote». Y enfatizó que «las masas no podían sobrepasar a los dirigentes, porque éstos tenían la obligación de dirigir y no de dejarse dirigir por las masas». Ese era el argumento de la revolución desde arriba. Y esta no era para Allende una pura preocupación teórica: «Si doy el visto bueno a esta toma», subrayaba «va a haber otra, y después una segunda toma y una tercera [...] porque ya se me escapó una».

Finalmente, Allende cedió y aceptó ratificar la demanda de los trabajadores e incorporar a la fábrica Yarur de textiles de algodón al área de propiedad social,

pero no porque los trabajadores lo hubieran convencido de que tenían la razón ni hubieran refutado sus argumentos o calmado sus temores. Más bien, porque los obreros industriales conformaban su base fundamental de apoyo, Allende no quería confrontarlos ni reprimirlos.

Otro factor más sorprendente es que, siendo Allende el maestro de la manipulación política, fuera superado por los dirigentes de los trabajadores de Yarur, que habían movilizado una impresionante alianza de apoyo que incluía a dirigentes nacionales de la CUT y de los principales partidos de la Unidad Popular, como también al ministro de Economía, Pedro Vuskovic, el más poderoso de su Gobierno. Este apoyo a los trabajadores de Yarur por parte de actores nacionales claves, sin embargo, subrayaba de nuevo que la revolución desde abajo no fue nunca completamente autónoma ni totalmente espontánea. Los partidos y movimientos de izquierda jugaron a menudo un importante papel detrás del escenario y lo mismo puede decirse de buena parte de los funcionarios del Gobierno y sus agencias.

Esta era verdad, si el MIR estimulaba a los sin casa a ocupar los terrenos suburbanos baldíos y a los pueblos indígenas para recuperar la tierra robada durante el siglo anterior, si el MAPU promovía tomas de campesinos o los funcionarios de la CORA colaboraban tácitamente con estas tomas o el Ministerio de Economía y los dirigentes socialistas y comunistas defendían las demandas de los trabajadores para la incorporación de sus fábricas al área de propiedad social antes de lo que se había planeado.

Esto revelaba una importante debilidad del proceso revolucionario chileno: la fragmentación de lealtades y tomas de decisión creaba tensiones y contradicciones dentro de la Unidad Popular, dentro del Gobierno, dentro de los partidos e, incluso, dentro de los individuos —y entre las variadas combinaciones de estos y el proceso revolucionario chileno como un todo—. Muchos de ellos subrayaban las tensiones entre la revolución desde arriba y la revolución desde abajo que nunca fueron realmente resueltas y que crecieron en alcance y profundidad a medida que avanzaba el proceso revolucionario, especialmente una vez que sus avances se hicieron más lentos y se vieron amenazados por la contrarrevolución. Dichas tensiones y contradicciones jugaron un importante rol en el eventual fracaso de la vía chilena.

Allende no estaba equivocado en cuanto a sus pronósticos sobre las consecuencias de permitir que la toma de la fábrica de Yarur llevara a su incorporación al área de propiedad social. Tras ella, Chile presenciaria olas de tomas de fábricas y socializaciones comenzando por el resto de la industria textil y siguiendo por fábricas más pequeñas que las noventa y un grandes empresas estratégicas que debían ser incorporadas. A mediados de 1973, más de quinientas empresas ya estaban en manos de sus trabajadores. El alcance, la velocidad y la lógica local de estas tomas de fábricas obligaron al Gobierno a abandonar su estrategia controlada y dividida en fases de cambios estructurales

para enfrentar un unificado capitalismo chileno e internacional consciente de que su existencia en Chile estaba en peligro. También obligó a la Unidad Popular a escoger interventores del Gobierno para esas empresas más allá de su limitado número de cuadros capacitados y con experiencia para ser administradores, incrementando el peligro de errores costosos dentro de las empresas del área de propiedad social.

Sin embargo, al principio las revoluciones de arriba y de abajo parecieron más complementarias que contradictorias. Dos brazos de un exitoso proceso revolucionario que avanzaba arrollando la resistencia capitalista con sorprendente facilidad. La revolución desde abajo llevó a rupturas revolucionarias usando tácticas —como la toma— que la revolución desde arriba, más legalista, no podía utilizar. Pero entonces, la revolución desde arriba pudo legitimar esos cambios usando sus poderes ejecutivos, mientras preservaba una plausible negación ante sus responsabilidades por las acciones de la revolución desde abajo.

Como resultado, en el primer aniversario del Gobierno de Allende, el presidente pudo decir ante un Estadio Nacional repleto: «Hemos cumplido», «hoy vengo a manifestar que [...] hemos ido conquistando el poder y hemos ido realizando los cambios revolucionarios establecidos en el Programa de la Unidad Popular».

El pueblo de Chile ha recuperado lo que le pertenece. Ha recuperado sus riquezas básicas de manos del capital extranjero. Ha derrotado los monopolios pertenecientes a la oligarquía [...] Hemos avanzado en el área social, base del programa económico, fundamento del poder para el pueblo. Controlamos el 90 % de lo que fuera la banca privada [...] más de setenta empresas monopólicas y estratégicas han sido expropiadas, intervenidas, requisadas o estatizadas. Somos dueños, podemos decir: nuestro cobre, nuestro carbón, nuestro salitre, nuestro acero: las bases fundamentales de la economía pesada son hoy de Chile y los chilenos, y hemos acentuado y profundizado el proceso de la reforma agraria: mil trescientos predios de gran extensión, dos millones cuatrocientas mil hectáreas han sido expropiadas.

Allende agregó a estos cambios estructurales en la economía, la profundización de la democracia. En una sección de su discurso titulado «El pueblo es Gobierno» destacó especialmente el avance de la democracia económica a través de la inauguración de la participación de los trabajadores en la administración de las empresas del área de propiedad social, que ya había empezado en Yarur y se extendía a otras fábricas estatizadas. Esto era parte de la profundización de la democracia a nivel de base, vista también en medio del florecimiento de las asociaciones vecinales, movimientos sociales y grupos políticos, que había facilitado la revolución desde arriba pero que, paradójicamente, había dado origen a la revolución desde abajo.

Allende también subrayó otros avances, como la redistribución del ingreso, con un asombroso 10 % del ingreso nacional desplazándose del sector capitalista al sector

de los trabajadores en solamente un año. El creciente gasto social fue destinado a educación, vivienda y salud pública, y produjo otros avances, incluyendo un récord de viviendas para los pobres sin casa. Muchos de esos logros se materializaron en tomas y organizaciones de pobladores y trabajadores, pero todos ellos también fueron resultado de la política de gobierno de Allende y de las negociaciones entre la revolución de arriba y la de abajo. Allende enfatizaba que todo esto había sido cumplido manteniendo una alta tasa de crecimiento y bajas tasas de inflación y desempleo. Parecía que los trabajadores de Yarur —y otros protagonistas de la revolución desde abajo— habían actuado bien al presionar al «compañero presidente» en busca de respaldo a sus tácticas, a los plazos de sus necesidades y a la implementación de sus demandas. Para esos obreros, pobladores y campesinos, era tiempo de vivir su sueño de revolución.